

Una publicación de
LE MONDE
diplomatique

Ética, poder y territorio
por Mónica Vargas Aguirre e Ivo Gasic Klett

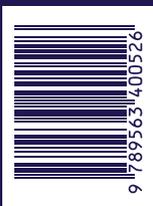
Gentrificación contemporánea: ¿poder de uso o abuso de poder?
por Jorge Inzulza Contardo

Algunos grandes dilemas-desafíos urbano habitacionales en Chile
por Ricardo Tapia Zarricueta

Llico post 27F: La comunidad invisibilizada en la reconstrucción de su hábitat residencial
por Walter A. Imilan & Xenia Fuster

Terremoto y territorio en Chile (ensayo)
por Daniel Flores Cáceres

Nuevas configuraciones del espacio que obligan a repensar el Estado y la política
por Mónica Vargas Aguirre



www.editorialauncreemos.cl
www.lemondediplomatique.cl

Una publicación de
LE MONDE
diplomatique

ÉTICA, PODER Y TERRITORIO

Mónica Vargas Aguirre, Ivo Gasic Klett,
Jorge Inzulza Contardo, Ricardo Tapia Zarricueta,
Walter A. Imilan, Xenia Fuster y Daniel Flores Cáceres

ÉTICA, PODER Y TERRITORIO

137



Editorial
Aún Creemos
en los Sueños

Agradecemos la colaboración prestada por el Doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile; el proyecto MECESUP UCH1008 del MINEDUC; La Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile; el Instituto de la Vivienda de la Universidad de Chile; y al equipo de Le Monde Diplomatique, sin la cual este proyecto no habría sido posible.

© 2014, Editorial AÚN CREEMOS EN LOS SUEÑOS

La editorial AÚN CREEMOS EN LOS SUEÑOS publica la edición chilena de *Le Monde Diplomatique*.
Director: Víctor Hugo de la Fuente

Suscripciones y venta de ejemplares:
San Antonio 434 Local 14 - Santiago.
Teléfono: (56 2) 664 20 50
Fax: (56 2) 638 17 23
E-mail: edicion.chile@lemondediplomatique.cl
www.editorialauncreemos.cl
www.lemondediplomatique.cl

Diseño: Cristián Escobar
Copyright 2013 Editorial AÚN CREEMOS EN LOS SUEÑOS.
ISBN: 978-956-340-052-6

Llico post 27F: La comunidad invisibilizada en la reconstrucción de su hábitat residencial

por Walter A. Imilan & Xenia Fuster*

Introducción

Josefina sintió un ruido interno. Un ruido desde abajo que rebotó en todos los cerros. No pudo mantenerse en pie mientras el suelo se agitaba, vibraban las ventanas y rechinaban las murallas de madera, entonces, tal como lo había escuchado desde niña, supo que había que alejarse del mar. De pronto el silencio total, sin electricidad pero con la luz de la luna, junto a su compañero y sus tres hijos corrieron alejándose de la playa sumándose a sus vecinos en la calle. El sol salió junto con el mar. Desde la altura observaron cómo su hogar desaparecía bajo el agua, y junto a él, buena parte del poblado de Llico en el Golfo de Arauco.

Es posible que la auto-evacuación de la población permitió no lamentar la pérdida de vidas humanas. Josefina, su familia y comunidad han trabajado y luchando desde el mismo 27 de febrero de 2010 para reconstruir su casa, su localidad, pero por sobre todo, sus proyectos de vida. Aún el proceso de reconstrucción de Llico es considerado abierto por su comunidad.

Lo procesos de reconstrucción post-desastres sicionaturales en Chile, pese a los más 17 terremotos de gran magnitud registrados en el Siglo XX, no cuentan ni con políticas ni institucionalidad claras y transversales a nivel estatal. Así, cada

*WALTER IMILAN ES ANTROPÓLOGO Y XENIA FUSTER TRABAJADORA SOCIAL, AMBOS HAN PARTICIPADO DESDE EL AÑO 2010 EN EL OBSERVATORIO DE LA RECONSTRUCCIÓN, UNA INICIATIVA IMPULSADA POR EL INSTITUTO DE LA VIVIENDA, FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE.

proceso de reconstrucción parece ser único, desdeñando las experiencias acumuladas en el pasado. Sin embargo, esto puede estar cambiando, la reconstrucción post 27F ha impulsado una reflexión e investigación como nunca antes en el país. Uno de los puntos centrales en este debate ha sido identificar el rol de las comunidades locales en los contextos post desastres. La capacidad resiliente de ellas es un recurso que debe ser puesto en el centro de toda política de reducción de riesgos y de reconstrucción, finalmente son las comunidades las que deben tomar decisiones y organizarse en momentos de desastres, más aún, son ellas las protagonistas en la reconstrucción de sus proyectos de vida.

El proceso reconstrucción post 27F (ad portas de declararse concluido por la autoridad gubernamental) ha quedado en deuda para reconocer y apoyarse en el capital social presente en muchas de las comunidades afectadas. Llico expresa con nitidez esta tensión, una comunidad con una historia destacable para enfrentar la emergencia, pero que ha experimentado en la acción del Estado y privados poca intención de involucrarlos en su reconstrucción. Esta evidencia plantea un debate sobre una nueva ética, una completa nueva forma de construir la relación entre el Estado y los actores del territorio afectados en contextos post desastres.

Los habitantes debieran estar en el centro de todo proceso de reconstrucción. El hábitat residencial destruido por un desastre, es decir, los lugares significativos donde la población lleva a cabo sus vidas cotidianas (vivienda, poblado, región), no se puede reducir sólo a la reposición de viviendas, el principal foco que ha contenido el actual proceso post 27F. La reconstrucción debe ser con los habitantes, cuya resiliencia, es un recurso para el proceso mismo. Trasformar el desastre en oportunidad implica construir una relación entre el Estado y las comunidades más allá de la provisión de un servicio a una población-“cliente”, es establecer un dialogo al que cada uno asista con sus recursos.

La población de Llico es un ejemplo notable de la capacidad resiliente de una comunidad, sin embargo, la reconstrucción de su hábitat residencial ha pasado por el lado de su organización local, capital social y resiliencia, mostrando hasta la fecha (principios del 2014), un pobre resultado. La reflexión sobre este proceso excede el debate sobre la participación ciudadana tal como comprende actualmente en el país, las evidencias muestran que es necesario ir más allá, plantear incluso una nueva ética basada en la comunicación de los actores.

1. Llico hora cero

Llico (paradójicamente en mapuzuungún significa salida de agua) es una pequeña localidad al sur de Arauco perteneciente a la misma comuna. Antes del 27 de febrero del año 2010 era un lugar apacible, dedicado principalmente a la agricultura y a la pesca artesanal. Sus habitantes, que no superaban los 600, vivían en amplios terrenos con casas autoconstruidas, la mayoría heredadas por generaciones anteriores. En este contexto se desarrollaba una vida estructurada frente al trabajo y a la familia. De modo que los principales actores que allí confluían eran los relacionados con los sindicatos y juntas de vecinos. Específicamente, la junta de vecinos que agrupaba a todos los pobladores de la Caleta, el sindicato de pescadores (agrupación de hombres), la agrupación de recolectores de orilla (agrupación de mujeres), entre otras.

La caleta de Llico, a diferencia de gran parte de las localidades del Golfo de Arauco, posee características geográficas que permitieron que el maremoto posterior al terremoto inundara la localidad casi por completa. A las 3:34 de la madrugada se siente el movimiento de tierra. Minutos después se comienzan a escuchar las versiones oficiales 'no va a haber tsunami, no va a haber tsunami, no hay alerta de tsunami'. El caso omiso a esas palabras fue inmediato, lo cual es atribuido por los llicanos a sus conocimientos sobre el comportamiento del mar por generaciones. Bastó muy poco tiempo para que se comenzaran a ocupar los cerros como lugar de protección, quedando el pueblo completamente vacío. Julián, pescador y dirigente, trasladó en su camioneta a las personas de la tercera edad, quienes fueron los últimos en llegar al cerro. Ahí llegaron a una casa ocupada por guardabosques, la que a pesar de tener todos sus vidrios quebrados era el único lugar donde podían estar más seguros, así que Julián tomó la decisión de abrir la puerta y dejar allí a los niños y adultos mayores para que se protegieran de la noche.

Llegadas las 7:30 de la mañana el agua inunda la playa, llegando hasta unos 80 a 100 metros de la estructura portuaria por sobre el camino principal, destruyendo todas las viviendas y comercio emplazados en el borde costero. El último recuerdo de esos lugares fue el poder de la ola y el sonido de los escombros.

Avanzada la mañana y ya con visibilidad completa se pudo observar la presencia de personas de otras localidades que fueron a ver e intentar recuperar aquello que quedó del tsunami. Esto fue interpretado por los llicanos como intentos

de saqueo, por lo que Julio junto a Carlos -presidente de la Junta de Vecinos en ese entonces- se subieron a su camioneta y tomaron rumbo hacia las diferentes partes del cerro donde se habían refugiado los otros habitantes y turistas. Esa misma noche organizaron patrullas de casi cuarenta guardias para que resguardaran a las personas de otros intentos de saqueo y de -eventuales- reos prófugos producto del colapso de la cárcel de Arauco. También se organizan cuadrillas de hombres para cortar árboles con el fin de dificultar el acceso de los caminos y generar así una sensación de mayor protección.

Como a Julio lo único que le quedó fue su camioneta con el estanque de bencina lleno, se hizo cargo junto a Carlos de la organización del patrullaje. Fueron por todos los lugares del cerro identificando la ubicación de las personas y la persona a cargo. Junto a los cuarenta guardias visitaban los sectores todas las noches.

La organización de estos grupos en los cerros fue a través del natural lazo familiar. Se dividieron así tres territorios conformados por pequeñas unidades de campamentos, en total 17, que fueron nombradas según los apellidos de sus miembros: las familias Martínez, Rojas y Sáez. Todos conformados por más de cien personas (un total de entre 20 a 50 familias), representados por 34 delegados y cinco voceros a cargo de hacer coordinaciones con la ayuda externa. Todos estos datos fueron recolectados por Vicenta, ex presidenta del sindicato de recolectores de orilla, quien junto a otras mujeres construyeron un registro de la cantidad de familias afectadas, enfatizando en el catastro de niños y personas con necesidades especiales (como adultos mayores y enfermos crónicos) con el fin de racionalizar y priorizar la futura ayuda.

Dos días después Julio viajó hacia Arauco y solicitó el apoyo a un patrullaje de Carabineros. El Capitán le preguntó si contaba con un arma. Julio le señaló que sí, a lo que el Capitán le respondió que las ocuparan si fuese necesario, debido a que la demanda de la población de Arauco hacía imposible disponer de efectivos para ir a Llico. Al salir pasaron por la Comisaría y se percataron que estaban entregando víveres. Como la prioridad eran los habitantes de Arauco, Julio trajo consigo sólo un quintal de harina, que fue distribuidos entre la población para preparar pan. Por otro lado, en los almacenes de Llico ya casi no quedaban productos, la información que llegaba por radio generó la imagen de caos en las ciudades cercanas, que llevó a los habitantes a intentar acumular bienes básicos. Entre ellos estaba el agua, un bien que comienza a ser muypreciado y que es recolectado en bidones por los hombres, mientras que

comisiones lideradas por mujeres se organizan para cocinar colectivamente con los productos disponibles.

Luego de un par de días llega la primera autoridad: el Alcalde de Arauco. Su misión es de acompañamiento y contención de la población, más que de la entrega de alimentos o ayuda urgente, prácticamente inexistente hasta ese momento. El Alcalde conversa con las personas e incluso autoriza- principalmente las mujeres- para irrumpir en la escuela y posta de Llico con el fin recuperar los alimentos y medicamentos que ahí estaban, ya que las familias no contaban con ningún servicio básico. Mirando hacia atrás en el tiempo, la comunidad considera que esta decisión fue acertada, son los mismos pobladores que logran organizar el abastecimiento en favor, principalmente, de los niños y enfermos. Todos coinciden y reconocen que las rencillas que pudiesen haber existido antes de la catástrofe pasaron a segundo plano, la urgencia logró unir a la comunidad en diferentes acciones.

Una semana después llegan militares a la caleta. Al ver el alto grado de organización de los vecinos decidieron retirarse y dejar de punto fijo a un solo hombre, por lo que el sistema de organización a través de guardias continuó. Detrás de los militares comenzaron a arribar personas desde otros lugares con donaciones, las que fueron acopiadas en un gimnasio. Esto obliga a que cada campamento nombrara a dos delegados para que pudiesen solucionar, organizar y distribuir en función de las necesidades de las personas.

2. Política de reconstrucción inadvierte capital social y resiliencia de las comunidades

La política de reconstrucción impulsada por el Gobierno, especialmente desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (1), toma la opción de utilizar institucionalidad e instrumentos de política pública preexistente. La tensión que provoca la utilización de una institucionalidad regular para ser aplicada en tiempos excepcionales ha sido intensamente debatida, constituyéndose en una de las dimensiones más sensibles en la evaluación del proceso post 27F. En los últimos 30 años el Estado chileno ha replegado su rol planificador y de configurador del territorio. El rol del Estado subsidario como proveedor de vivienda para población vulnerable ha terminado restringida a la asignación de subsidios para la adquisición de viviendas, mientras que todas las fases del proceso habitacional -organización de la demanda, diseño y construcción- son asumida por empresas (EGIS) que pueden, según su decisión, lucrar.

En este escenario el 27F encuentra a un Estado en un proceso sostenido de debilitamiento de su capacidad de gestión y de actor sobre las dinámicas del territorio. Las tres etapas de gestión de un evento catastrófico que identifican los organismos internacionales, ocurrencia, emergencia y reconstrucción, no son abordadas por la política territorial chilena. Una, aún en discusión, Ley de Protección Civil abordaría apenas la primera de ellas.

En los últimos 3 años hemos identificado en el trabajo de campo un alto grado de especificidad y variabilidad de los procesos de reconstrucción, justamente por la inexistencia de una política e institucionalidad para ello. Sin embargo, pese a esta dispersión, es posible señalar algunos elementos en común, tal como es una relación entre el Estado y la población afectada casi exclusivamente mediada por la asignación de subsidios para la recuperación de las viviendas destruidas. El Estado asigna, luego empresas privadas construyen. En el ámbito de la planificación del territorio post-desastre ésta fue encomendada, en los llamados Planes Maestros, a empresas privadas y Universidades sin vínculos con los territorios, quienes debían formular una cartera de proyectos de inversión en el mediano plazo. Estos planes maestros (más de 100) se formularon con niveles básicos de participación ciudadana. En la actualidad la apropiación de la población de estos planes es baja, mientras que su implementación ha sido débil.

Los ciudadanos han estado ausentes de la política de reconstrucción, ellos han sido problematizados como receptores de subsidios estatales, obviando e inadvirtiéndolo el capital social de las comunidades como un recurso vital para la reconstrucción de sus proyectos de vida. La narración de los primeros días post desastre en la localidad de Llico pone en evidencia la necesidad de incluir dos aspectos fundamentales en los procesos de reconstrucción, sintetizados en los conceptos de capital social y resiliencia.

Bourdieu formuló el concepto de capital social de una forma clara y directa, planteando que este tipo de capital es “el agregado de los recursos reales o potenciales que se vinculan con la posesión de una red duradera de relaciones más o menos institucionalizadas de conocimiento o reconocimiento mutuo” (Bourdieu, 1985:248). En esta red, las relaciones se basan en la confianza, reciprocidad y cooperación, en algunas ocasiones estas cualidades se observan como aspectos de organizaciones

sociales que favorecen el beneficio mutuo (Putman, 1993). Por su parte, resiliencia es un concepto que, si bien posee decenas de acepciones, su uso en el contexto de desastres socionaturales se vincula a una condición y capacidad de personas y colectivos para sobreponerse y construir mejores situaciones de vida a las anteriores de un desastre (Foster, 2011). Podríamos decir que la resiliencia requiere de capital social, en contexto de reconstrucción la resiliencia se desarrolla como consecuencia de una serie de “arreglos institucionales” que la sostienen. Es decir, una reconstrucción resiliente desde la perspectiva del Estado debería al menos contener tres pasos: Primero, pensar la reconstrucción como un asunto principalmente de reconstrucción de proyectos de vida más que de infraestructura y equipamiento, es decir, las personas en el centro de proceso. Segundo, reconocer la existencia de condiciones resilientes en comunidades a partir del capital social desplegado por una comunidad. Tercero, fomentar decididamente el despliegue de las capacidades resilientes a través de acciones en conjunto con la comunidad afectada.

3. El Estado llega a Llico

Un par de semana después del 27 de febrero aparece de manera mucho más visible el Gobierno en Llico. Su lenta reacción genera que tanto dirigentes como habitantes perciban su poca presencia en el proceso de emergencia, la comunidad releva el rol y aportes de los gobiernos de Japón y Brasil, así como de privados, fundaciones, ONG's, iglesias, entre otras.

De las primeras acciones que surgen del Gobierno, vistas así por la comunidad, es el arribo de la Fundación Un Techo para Chile (Fundación privada) para la entrega de viviendas de emergencias, las que por solicitud del Alcalde, debían ser de una calidad acorde a las condiciones climáticas de la localidad, iniciativa que fue respaldada por sus dirigentes. Por el momento eso resuelve el déficit habitacional, sin embargo comienzan a surgir tensiones, específicamente cuando se ordena y racionaliza el apoyo Estatal. El Municipio decide expropiar 4 hectáreas de las que fueron ocupadas sólo 2. Allí se instalaron 58 damnificados y se promovió que quienes tuvieran la posibilidad de compartir terreno con familiares, se les instalaba la vivienda de emergencia en ese sitio, de modo tal que en total sumaron 115 damnificados. Esta población será reconocida como habitantes de “Aldea”, a quienes se dirige la ayuda gubernamental. De esta forma, se establecen dos categorías, los habitantes en los sitios destinados para vivienda de emergencia y los habitan-

tes que se asentaron en otros sitios. Esta diferenciación, producida por un hecho administrativo, implementado sin mayor reflexión en su momento, generó un quiebre en la comunidad que perdura hasta el día de hoy.

De las últimas acciones que surgen en el proceso de emergencia fue la creación de una cooperativa impulsada por los pescadores junto al Municipio para organizar los beneficios que dona la empresa IncaJapón. Cooperativa que posteriormente se transformó en una agrupación en la que participaban todos los sindicatos y agrupaciones del Golfo de Arauco. Esto porque el terremoto y tsunami no sólo impactó en la destrucción estructural de las localidades, lo que desencadena la pérdida del material de pesca, botes, trajes de buzo y máquinas, sino que generó un cambio tan radical en la flora y fauna marina, que el Golfo de Arauco perdió la riqueza pesquera con la que contaba, afectando directamente a las dinámicas laborales del sector. Por ello se hizo necesario aunar coordinaciones entre las personas y familias afectadas, mientras que el estado estuvo ausente del fomento productivo de la localidad. A pesar que estas organizaciones más amplias se fueron diluyendo con los meses, en Llico permanece por más de un año donde sus participantes diseñaron proyectos sociales que fueron postulados a organismos privados.

Meses después y con un despliegue mucho más explícito del Estado, sus políticas y programas, el paisaje de Llico se empieza a reconfigurar: se prohíbe la construcción en borde costero. La construcción de viviendas definitivas se desplaza hacia la periferia del poblado, se mejoran veredas, la calle principal se reconstruye y los servicios se restauran. El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) encarga la formulación de un Plan Maestro de reconstrucción (PRBC18) que proponga intervenciones en el nuevo trazado del poblado así como una solución al borde costero que se declara en zona roja, con peligro de inundación por maremoto. La intervención presentada coincide con una propuesta anterior al 27F, que buscaba reconstruir la caleta y hacer una costanera. Nebulosa es la información que tienen los llicanos respecto de este tema, debido a que la idea original cambia sin que ellos tengan la claridad de sus justificaciones. Surge el proyecto del “bosque de mitigación” consistente en construir un bosque en el borde costero que actúe como muralla de contención en caso de maremoto. Para los llicanos estos argumentos no son tan claros, primero porque la “ola” superó el tamaño de los árboles, y segundo porque el tipo de árboles no son nativos en la región, lo cual atentaría contra

el paisaje y las costumbres de la Caleta.

4. Nueva ética en el territorio: De la participación ciudadana a una planificación comunicativa

La participación ciudadana es un concepto escurridizo. Expresa la necesidad de integrar a las poblaciones en alguna de las etapas de las acciones que intervendrán en sus contextos de vida. Sin embargo, el uso indiscriminado del concepto, devenido en alocución políticamente correcta cuando se trata de política pública, ha llegado a vaciarlo de precisión. Una buena forma de encuadrar su uso lo encontramos en la idea de la “escalera de la participación” (2) que permite identificar desde los niveles más bajos de entrega de información y consulta con la población, pasando por los niveles de diseño participativo, hasta los más elevados de co-gestión.

La actual de participación ciudadana en Chile (Ley 20.500 del 2011) es un marco más bien laxo, sin procedimientos claros ni instaura relaciones vinculantes con las consultas ciudadanas. Sin embargo, antes de pensar en los procedimientos, la reflexión debiera abordar la democratización de las decisiones sobre el territorio, y de esta manera ir desde la discusión sobre la participación ciudadana hacia una ética dialógica que permita desplegar procesos de planificación. Sugerimos una breve reflexión en torno a esta idea.

Antes de comenzar a describir y analizar en qué consistiría una ética dialógica, es necesario precisar que se entiende por moral. Para nuestros efectos, entendemos moral como un saber práctico, en tanto busca orientar la acción de los sujetos de manera racional (Cortina, 1999). Es en este proceso donde se presentan problemas respecto de los principios que orientan esa acción. La ética de una u otra forma asume dicha dificultad, es decir, se encarga de los problemas de la moral desde distintos puntos de vista. En consecuencia, han surgido distintos tipos de éticas, tal como prudencial de Aristóteles, la calculadora, la práctica (Kant) y la comunicativa.

Uno de los principales exponentes de la ética comunicativa es Jürgen Habermas, para quien la ética dialógica es una ética del discurso, la cual se basa a su vez en la razón comunicativa. Es ahí donde el interés de todos los participantes es esencial para buscar consensos comunicativos. En la acción comunicativa los sujetos no se orientan por la persecución de metas personales únicamente, sino que en este proceso buscan armonizar sus planes o metas con las definiciones comunes de acción (Morán, 2006). Ahí se encuentra una de las principales

diferencias entre la razón práctica de Kant y la comunicativa de Habermas. Mientras que para el primero se trata de motivos personales, determinados por un fin interno racional, para Habermas, la validez de los mandatos no se encuentra sólo en el individuo enfrentado a su racionalidad universal, sino escapa de este “factum de la razón” para ser parte de un proceso de argumentación dialógica. La ética dialógica no renuncia al principio de la universalidad y racionalidad, tan perseguido por Kant, sino que propone lograrlo a través de la estrategia del diálogo entre los sujetos y de su consenso. En relación a esto, la ética dialógica destaca el rol del lenguaje, el cual no sólo es un medio para la verdad, sino que además permite el entendimiento intersubjetivo y por lo tanto la verdad se constituye a través de un discurso con otros para avanzar hacia una verdad en común (Habermas, 2000).

Así entonces la ética comunicativa implica la participación de todos los afectados en un diálogo. Sin embargo la participación debe ser en determinadas condiciones que son: libertad e igualdad, para que así las personas se involucren en un proceso dialógico a través del cual, de manera cooperativa busquen la verdad, sin ningún otro tipo de coacción que no sea la del mejor argumento, sin necesidad de incorporar otro tipo de presión o fuerza.

A partir de lo anterior, en la ética dialógica lo fundamental es el diálogo entre los sujetos, donde cada uno de ellos asume un rol respetando al otro, y por tanto reconociéndolo y validándolo como un igual. La definición de ética dialógica presentada sólo se puede comprender de acuerdo a la concepción de sociedad y sujeto que desarrolla Habermas, donde éstos a partir de su capacidad de comunicarse se convierten en individuos a través de un mundo de vida intersubjetivo, y por lo tanto, cuyos principios y normas son construidos y compartidos. Así entonces mediante el proceso de diálogo y discusión, donde las subjetividades interactúan, cada uno de los sujetos presenta sus argumentos, en un contexto de respeto e igualdad.

Sólo a través de una ética dialógica entonces se podrán realizar principios como la justicia y solidaridad, donde el primero alude a la libertad de los individuos que no pueden delegar la representación de sus intereses y el segundo se refiere al bien de la comunidad y de cada uno de los miembros de ella, lo que es fundamental pues nos desarrollamos como sujetos solo en una comunidad intersubjetiva, donde el otro no puede ser

2. Entre muchas referencias se pueden ver los escritos de Bernardo Kliksberg.

obviado, sino considerado y confrontado a partir de un proceso dialógico. Lo señalado se puede ver reflejado cuando el autor señala que:

“Los iguales derechos de los individuos y el igual respeto a su dignidad se apoyan en una red de relaciones interpersonales y de reconocimiento recíproco (donde) la calidad de la convivencia no se mide solamente por el grado de solidaridad y por el nivel de bienestar, sino también atendiendo hasta qué punto los intereses de cada individuo particular se tienen en cuenta por igual en el interés general” (Habermas, 2000:21)

Pensar en una planificación comunicativa implica diseñar e implementar acciones que reconocen a los actores como partícipes de una realidad intersubjetiva que los constituye. Los principios normativos se deben establecer a través de procesos comunicativos y argumentativos, donde todos y cada uno de los sujetos participe en igualdad, respetando la libertad del otro, siendo trascendental el intercambio de ideas, donde los problemas se resuelven no de manera interna sino en interacción con los demás y a partir de ellos establecer las normas morales. Un pensamiento de este tipo puede parecer radical bajo el prisma de los procedimientos de participación ciudadana, pues implica que los actores que poseen mayor cuotas de poder (Estado y privados) abran la definición de lo bueno, hermoso y deseable para el territorio como un producto del diálogo en libertad de todos los actores que construyen (habitan) esa realidad. Esto es, sin duda, la necesidad de una nueva ética del territorio.

5. Las viviendas de Llico

A pesar de las acciones emprendidas en el periodo de emergencia, y los frutos organizativos que éste tuvo, la causa que más sostenibilidad le dio a la organización en Llico es, hasta el día de hoy, la vivienda. La casa es reconocida por todos los llicanos como un problema y necesidad vital para todas las familias que las perdieron. Justamente por eso existió la necesidad de fortalecerse organizativamente, ya que de lo contrario el proceso habría sido aún más extenso. Es por esta causa que Julio fue electo democráticamente por la comunidad para representarlos en la mediación por la vivienda.

Al dejar las carpas en la emergencia las familias se desplazaron a habitar un terreno de Celulosa Arauco en el límite urbano de la Caleta. Allí se instalaron viviendas de emergencia, donde actualmente viven 24 damnificados en la Aldea de Llico.

Ya el año 2010 comenzaron las promesas en materia de reconstrucción, donde se les señaló a los llicanos que en octubre

de ese mismo año los trabajos comenzaban. Sin embargo esto no ocurre y las desconfianzas del poblado en su relación con las autoridades se empiezan a acrecentar, lo cual se cristaliza en una toma de camino en la Provincia de Arauco. El encargado de la reconstrucción de ese entonces toma contacto con los habitantes de Llico para explicar todos los retrasos que se presentaban, sólo entonces se fijan las primeras coordinaciones para el inicio del proceso. Ya en febrero del año 2012 se aprecian los primeros trabajos, comenzando por la focalización de damnificados y la presentación de propuestas de vivienda por parte de cinco empresas constructoras. En una asamblea vecinos y vecinas decidieron a mano alzada la propuesta que más les convenía. A pesar que la cantidad de viviendas era pequeña y su término estaba proyectado en un poco más de seis meses, es decir, el 27 de febrero de 2013, hasta diciembre de ese mismo año aún no eran entregadas. Las obras habían sido detenidas por el Municipio por no ajustarse a las normativas de construcción. Luego de negociaciones, las obras son retomadas.

Ya en el proceso de construcción se comienzan a develar diversas tensiones. Primero surgen los cuestionamientos por la lejanía de las casas con el borde costero, esto afecta directamente las arraigadas prácticas cotidianas relacionadas con la pesca. Por otro lado, el tamaño del terreno hace que las viviendas se construyan muy cerca las unas con las otras. Anteriormente las viviendas autoconstruidas se emplazaban en terrenos suficientemente amplios para no sólo albergar la casa-habitación, sino también espacios de bodega de material de pesca, animales (tales como caballos y gallinas) y huertos. Entonces, prolifera la sensación de hacinamiento, no existe costumbre del llicano de vivir con otros tan cerca, se sienten como viviendo en una ciudad, también con sus problemas y dinámicas, la población se siente muy incómoda. Adicionalmente, se cuestiona la escasa urbanización del terreno, el sistema de alcantarillado del mismo y la calidad de construcción de las viviendas, lo que pone en duda los impactos positivos que tiene la reconstrucción para sus vidas.

En todas estas controversias, la comunidad argumenta que nunca han sabido quienes son los últimos responsables, o quienes debieran resolver las tensiones. El diálogo de la comunidad con el proceso de reconstrucción local ha pasado a través de cartas dirigidas a autoridades nacionales, solitud que organismos como el Consejo de Transparencia, les auxilie en acceder a información sobre los proyectos que les están cambiando la vida.

Conclusiones: Aprender para reconstrucciones comunicativas

La comunidad de Llico muestra una historia, que no por ser extraordinaria es única. Innumerables comunidades tuvieron la capacidad de organizarse para enfrentar la ocurrencia y emergencia de la catástrofe del 27F. La mayor de las veces, las comunidades se auto organizaron frente al abandono, silencio o tardanza del Estado y privados. Esa misma fuerza y capacidad vista como capital social y potencial resiliencia ha sido invisibilizada por el Estado al momento de llevar adelante el proceso de reconstrucción. Por una parte, los llicanos de ser protagonistas, de auto gestionar su emergencia, han pasado a ser tratados como individuos portadores de un subsidio, voucher como lo ha llamado acertadamente la administración del Presidente Piñera. Mientras que planificadores y constructores desde ciudades distantes arriban para construir el nuevo Llico, sus habitantes observan desde lejos, distantes, pero comprometidos con disputar aún sobre los impactos que la reconstrucción “les traje”.

Hemos argumentado que es fundamental repensar estos procesos para ubicar a las comunidades locales en el centro, para desde allí, impulsar la reconstrucción de los territorios. La planificación comunicativa implica una intención más radical que la simple y, muchas veces, vacía concepción de la participación ciudadana. Esta apuesta deviene en un imperativo moral y ético al concebir la centralidad del diálogo entre actores para la construcción de la sociedad. Las comunidades como Llico poseen capacidades para devenir en un actor en el modelamiento de su propio hábitat, ahora el Estado está en tiempo de empezar a reconocerlo. ◆

B. Bibliografía

Bourdieu, P. (1985): “The Forms of Social Capital” en Handbook

of Theory and Research for the Sociology of Education, ed. J. Richardson, N.Y. Greenwood.

Cortina A. (1999) "El quehacer Ético. Una guía para la educación moral". Universidad de Valencia. Aula XXI, Santillana

Foster, K. A. (2011). Professing Regional Resilience. En A. Liu & R. Anglin (Eds.), Resilience and opportunity: lessons from the U.S. Gulf Coast after Katrina and Rita (pp. 17-30). Washington, D.C.: Brookings Institution.

Habermas J. (2000) "Aclaraciones a la ética del discurso". Editorial Trotta, Madrid.

Morán J. (2006) "Fundamentos de Trabajo Social: Trabajo Social y Epistemología", Ed.Tirant Lo Blanch, Valencia.

Putnam, R. (1993): "Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy". Princeton, University Press.

W.M y X.F.